



LAS ELECCIONES EN BOLIVIA Y LOS PROXIMOS DESAFIOS

Diciembre 6 fue la fecha de las elecciones generales en Bolivia. Sus resultados van más allá del respaldo otorgado por la población al Presidente Evo Morales y ha terminado por ser, un nuevo golpe (contundente como tantos otros), dado por el pueblo a los tradicionales grupos de poder.

La victoria del MAS en la gesta electoral del 6 de diciembre, es sin duda alguna contundente y por más que se intenten argumentos atenuantes, nadie puede poner en duda un triunfo categórico e imposible de objetar. Hemos oído, como siempre, miles de los más rebuscados paliativos: que si el triunfo de la derecha en Pando, Santa Cruz y Beni revela un país polarizado; que si el padrón biométrico jugó a favor del oficialismo y las más ridículas pero no por eso menos frecuentes denuncias de urnas llenadas previamente. Es inútil, la reedición de una nueva victoria electoral del oficialismo, esta vez con el 64% de las preferencias y con casi tres millones de

votos a su favor, resulta ser, sin equívoco alguno, expresión del rechazo mayoritario a la tradicional clase política. Más allá de todo ello, la lectura de los resultados electorales de diciembre 2009, amerita puntualizaciones que incluyen los desafíos inmediatos que el gobierno de Evo Morales ratificado una vez más, habrá de asumir en la construcción del nuevo Estado Plurinacional.



Tras la aprobación en enero de la nueva CPE, la agenda electoral quedó en el centro del contexto político nacional y

tanto el oficialismo como la oposición, se vieron obligados a moverse de forma inteligente para alcanzar sus objetivos. La reelección de Evo Morales resultaba inminente, pero en sí misma insuficiente, puesto que el gobierno necesitaba alcanzar el dominio sobre la Asamblea Plurinacional. Para ello, resultaba imprescindible captar el voto de la clase media, sostener los niveles de aprobación en los sectores populares y conseguir erosionar sustancialmente cualquier posibilidad de articulación de la derecha, que intentaba recomponerse de la derrota sufrida por su intento de golpe de estado del 2008. Controlar 2/3 de la Asamblea Plurinacional era el objetivo necesario que perseguía el gobierno en la contienda electoral.



La oposición por su lado, también se veía demandada a definir acciones con inteligencia: recomponerse de las fisuras, no sería asunto fácil en medio de una situación electoral en la que ciertamente no tenía alternativa para llegar a la presidencia del país, pero en la que necesitaba garantizarse una presencia importante en la Asamblea Legislativa Plurinacional para sostener el poder de veto detentado y usufructuado durante los casi 4 años de gestión del gobierno de Evo Morales. Lograr superar los intereses personales en torno a las

candidaturas y los protagonismos políticos, sería para los sectores de derecha el desafío necesario, que sin embargo, no conseguirían superar a lo largo de todo el año. Por otro lado, la bandera autonómica, que ostentaron durante buena parte de la gestión de Evo Morales, fue tan burdamente manoseada que terminó perdida en el intento de golpe de estado de septiembre 2008 y para colmo, terminó siendo retomada hábilmente por el oficialismo. Sin bandera de lucha a la que asirse y sin una propuesta coherente y nacional, la derecha volvió a su discurso de confrontación y descalificación, terminando sumida en disputas internas secundarias en torno a candidatos, sin conseguir un solo destello de lucidez política a lo largo de todo el año.

Conforme se avanzaba en la agenda electoral, la reelección de Evo Morales no solo era inminente, sino que virtualmente imposible de impedir, habida cuenta la fragmentación de la oposición y su dramática imposibilidad de generar propuestas nacionales. El fracaso electoral de los sectores de derecha, quedó sellado no solo por la incapacidad de alcanzar un frente único y por la ausencia de un candidato capaz de constituirse en verdadero contrincante del Presidente, sino además por su incapacidad crónica de lectura del contexto, que les ha impedido ver y aceptar que, para las grandes mayorías bolivianas, el retorno a una hegemonía de derecha y al modelo neoliberal es inaceptable. De haber visionado la realidad sobre la que les tocaba actuar, hubiesen propiciado una reconducción de sus acciones o por lo menos de su discurso.



La falta de habilidad política y de visión estratégica, ha impedido a los sectores más recalcitrantes de oposición, asumir que su papel debía ser reconducido. Más aún, esta oposición perdió el rumbo de sus intereses y quedó empantanada en la defensa fútil de una hegemonía en la que insisten, pero que, a estas alturas es inexistente. A lo largo de los años de gobierno del Presidente Evo Morales, no han sido pocas las oportunidades que han tenido para oxigenarse, rearticularse, reposicionarse y hasta renovarse con la emergencia de nuevas banderas de lucha y nuevos líderes. Sin embargo sus intereses estratégicos, han estado siempre anteceditos por intereses más mediatos y hasta individuales, con lo que en definitiva, han ido acumulando derrota tras derrota y fisura tras fisura, al punto de quemar rápidamente los nuevos liderazgos y perder las banderas de lucha que habían llegado a capitalizar. Si la división opositora en diversas candidaturas, fue reflejo de su debilidad e inoperancia; los candidatos de la dupla principal de oposición, reciclados de la más tradicional partidocracia, signaron de forma inevitable la magnitud de la derrota que se obtendría en las urnas en diciembre.

A pesar de ello, los errores cometidos por la oposición en el escenario electoral

deben entenderse como expresión de una derrota anterior que se remonta a las gestas populares del 2000, 2003, 2005 y más recientemente el 2008 y que terminaron por deslegitimar y fracturar el sistema de democracia pactada de la clase política y la partidocracia tradicional. Es esa derrota de la que no consiguen levantarse, la que les ha dejado en un punto de inflexión que les impone la necesidad de buscar la subsistencia acomodándose a los nuevos tiempos y es esa derrota, asestada por el movimiento popular, la que explica el nuevo revés electoral que con dramatismo han sufrido ahora.



En otro orden de cosas, el 64% obtenido por el MAS, es sinónimo de la demanda popular de cambios de verdad en un país, en el que la clase política ha carecido siempre de una propuesta nacional y se ha ajustado a las definiciones y programas impuestos desde afuera, ajenos a los intereses del país y su población. El partido de gobierno, sin duda alguna está lejos de evadir las presiones y condicionamientos externos, pero ha conseguido simbolizar la lucha de las mayorías bolivianas por la soberanía y por la recuperación de la dignidad nacional. Aún con profundas diferencias entre su discurso popular,

anticapitalista y antineoliberal y su gestión más bien tibia respecto de las transformaciones estructurales, el partido oficialista y concretamente Evo Morales, han conseguido sostener hasta ahora, la esperanza de las mayorías en el proceso de cambio que promete y ha sabido capitalizar la inexistencia de otras alternativas políticas en el país.



Por otro lado, para los sectores medios e incluso para sectores más tradicionales, los casi 4 años de gobierno de Evo Morales, han servido para disipar buena parte de los temores sembrados por los sectores más recalcitrantes a través de sus campañas mediáticas. A estas alturas, los fantasmas creados en torno a expropiaciones, estancamiento económico, proscripción de la propiedad privada, escasez y hambruna, van desapareciendo con la constatación que el proceso impulsado por el Presidente -a pesar del tono del discurso- deriva en un proceso de reformas y no en el proceso de revolución social al que tanto temen.

En términos de oferta electoral, las opciones quedaron claramente definidas:

o la apuesta se hacía por el prometido cambio del Presidente Evo Morales o se hacía por el retorno al pasado. En esos términos fueron entendidas las elecciones de diciembre, en un país que mayoritariamente busca enterrar los restos del estado neoliberal. El Presidente Evo Morales hizo referencia a ese contenido que las elecciones del 6 de diciembre tenían para el pueblo: "El pueblo hoy tiene derecho a decidir conscientemente si se sigue profundizando la democracia o retornar al neoliberalismo, si están con el cambio o están con el neoliberalismo (...) si el pueblo se equivoca, en las elecciones generales del 6 de diciembre volveremos al pasado", acotaba el Presidente durante toda la campaña.

Habiendo conseguido a lo largo de sus años de gobierno, librar reiteradas contiendas electorales con buenos resultados que lograron, en todos los casos, superar la barrera del 54% de votos que lo llevó a palacio de gobierno, el MAS se concentró en conquistar el voto de la clase media, que garantizaría no solo la reelección y los dos tercios en la Asamblea plurinacional, sino también perforar los bastiones territoriales de la derecha.



Lo hizo, por un lado incluyendo en las principales candidaturas a profesionales y otros personajes de los sectores medios de la población, y por el otro, con medidas más polémicas como la cooptación de de activistas de la nefasta Unión Juvenil Cruceñista, grupo emblemático de ejercicio de la violencia fascista contra el pueblo, bajo el mando (hasta ahora) de los más recalcitrantes miembros de la Media Luna.

A pesar de ello, el apoyo sostenido al Presidente a lo largo de reiterados procesos electorales, no solo logró ser conservado (incluso el de sectores populares que han manifestado sentirse afectados por la política negociadora del gobierno, como los indígenas), sino que logró sumar a aquellos que votaban con la esperanza en el cambio estructural, a los que lo hacían aliviados por la convicción en que la transformación estructural no llegaría, a los que caían seducidos por la estabilidad macroeconómica, la política social de bonos, la reforma política autonómica o las promesas de industrialización; a los disidentes de una oposición que ya no les brindaba beneficios y a los que buscaban frenar –mediante el voto- la desestabilización política y económica auspiciada sin cuartel desde la oposición.

El resultado fue el deseado con ansiedad desde el oficialismo: se logró la reelección presidencial y la obtención de una mayoría aplastante del MAS en la Asamblea Plurinacional, además de tener un importante crecimiento en los bastiones de la propia Media Luna, arrebatando la victoria en Tarija y en Chuquisaca y dejando muy menguada la votación de los opositores en los departamentos de Santa Cruz, Beni y

Pando, en donde se impusieron, pero con un apretado margen de votos a favor: 126,269, 24,960 y 2,405 respectivamente.

Pero si bien se prevé una gestión sin mayores obstáculos desde el poder legislativo, el escenario en el que el gobierno reelecto deberá administrar la victoria, no deja de tener sus dificultades y de imponer particulares desafíos. De hecho, la agenda electoral seguirá ocupando el centro de la actividad política hasta abril, cuando se afronte la elección de autoridades de los gobiernos autónomos departamentales y municipales. Y en esa agenda, pese a la ventaja que las elecciones generales han supuesto para el MAS, el resultado electoral no está tan claramente definido ya que si bien el liderazgo regional de la derecha está afectado, también es cierto que conserva aún un peso específico en lo territorial que no puede ser subestimado.



Por ahora, la derecha continúa sin articular su estrategia y no parece con capacidad de superar sus divergencias internas: los frentes con pretensión de acreditarse en la contienda proliferan, expresando su dramático fraccionamiento interno, que les amenaza –otra vez- con la dispersión del voto. Los prefectos de Tarija, Beni,

Chuquisaca y Santa Cruz parecen decididos a candidatear por las respectivas gobernaciones aún cuando no hay tras ellos, el apoyo unánime que antes consiguieran; en tanto otros personajes emblemáticos de las fuerzas cívicas, están borrados literalmente del escenario electoral y político regional, en gran parte debido a su papel de promotores del intento de golpe de estado de septiembre del 2008 o por sus evidentes vinculaciones con la célula terrorista desbaratada en abril 2009. Pese a todo ello, la oposición tiene una oportunidad (y el inminente desafío) de conservar para sí los ejecutivos de las nacientes gobernaciones autónomas, pero es poco probable que consiga la hegemonía en sus regiones, habida cuenta que a partir de abril, los gobiernos departamentales contarán con un órgano legislativo que forzará a cualquier administración departamental de derecha a buscar gobernabilidad, no solo en oposición al gobierno nacional sino, también enfrentando a los opositores en sus propias asambleas departamentales.

En el oficialismo, la búsqueda de candidatos para conquistar gobernaciones y asambleas en los departamentos controlados por la oposición ya ha originado las primeras controversias respecto de la decisión de incluir a personajes vinculados a los partidos políticos de la derecha tradicional. La diferencia en el nuevo escenario electoral, es que esta vez, el MAS y el MSM participan de forma separada, lo que obliga al gobierno a pugnar no solo enfrentando a la tradicional oposición, sino también la que tendrá de sus hasta ahora aliados.



El Movimiento Sin Miedo (MSM), por su parte busca a través del acceso a gobiernos territoriales departamentales y municipales, lograr un posicionamiento fuerte y propio en el nuevo estado autonómico en cuyo diseño ha sido actor de primera línea gracias a la alianza con el gobierno. En, tanto en los escenarios más locales de los municipios, incluyendo a los que han optado por la autonomía indígena, el partido de gobierno despliega negociaciones y presiones con el objetivo de lograr que su sigla sea la única que pugne en las elecciones por el movimiento popular. Así las cosas, el actual escenario pre electoral, es un tira y afloja para negociar y definir candidaturas, tanto desde el lado de las fuerzas de oposición de la derecha y los partidos tradicionales, como desde el lado del oficialismo y los sectores populares.

Más allá del escenario electoral local de abril, el gobierno ahora reelecto de Evo Morales, tiene otros desafíos que deberá afrontar y, quizá el de mayor importancia política, es el de definición del rumbo a seguir en el nuevo período de gestión que habrá de iniciarse a partir de enero 2010. Con la reelección asegurada y la

hegemonía del poder legislativo, la institucionalidad del nuevo estado, puede conformarse sin mayores sobresaltos y sin estar supeditada (salvo opciones propias del oficialismo) a negociaciones con la derecha que deriven en recortes a los alcances de la CPE. Ello significa que el gobierno está inexcusablemente obligado a profundizar un proceso de cambio, que en las demandas populares ha implicado la transformación estructural, pero que –a no ser en lo discursivo- sigue siendo difuso y hasta tibio en la práctica y la gestión gubernamental.

Por ello, aunque a nivel nacional, las elecciones de diciembre parecen marcar una correlación de fuerzas favorable al oficialismo, no debe olvidarse que justamente conseguir la hegemonía en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha implicado la inclusión de las más diversas corrientes ideológicas y de clase dentro de las filas del oficialismo, lo que hace prever que será en lo interno en que se defina no solo la correlación de fuerza dentro de la institucionalidad, sino el propio alcance que tengan las disposiciones de la CPE y el contenido mismo del Estado Plurinacional en las normativas que deben aprobarse.

Con la autonomía funcionando en todos los municipios y departamentos del país, aún de manera previa a la definición del contenido de la propia autonomía, el alcance de la misma parece estar signado por la propuesta de anteproyecto de Ley Marco de Autonomía y Descentralización que ya ha hecho pública el gobierno y que queda circunscrito a un proceso más profundo de descentralización en el que la novedad está en la elección por voto de

las autoridades, consolidando el sistema de democracia representativa, pero sin contemplar una transformación cualitativa de la participación política social que demanda el nuevo estado cimentado en el pluralismo y el protagonismo popular. Por ello, los múltiples gobiernos autónomos a ser electos en abril, definirán un nuevo escenario de la correlación de fuerzas, en el que se prevé la emergencia de nuevos mediadores de la voluntad política popular, cuando no el reciclaje de los desgastados, pero todavía existentes actores políticos tradicionales.



Es entonces el papel de la participación política e independiente de la sociedad civil y de los sectores populares en el proceso de cambio que dará lugar al nuevo Estado Plurinacional, el que en lo inmediato demanda de definiciones claras y es en este aspecto en el que se plantean los iniciales desafíos y en el que van gestándose las preocupaciones sobre la hegemonía electoral conseguida por el MAS: en tanto sus propuestas, no presentan cambios sustanciales respecto a la participación política social; las actitudes adoptadas ante la exigencia indígena de respeto al derecho a la consulta previa, al autogobierno y a la

participación política bajo sus propias normas y sin intermediarios ya generan cuestionamientos al gobierno, no solo por el enojo y la molestia que ha manifestado por la exigencia del cumplimiento de derechos constitucionalizados, sino por la imposición gubernamental conseguida a través de la presión, la descalificación y hasta la promoción de la división interna en las organizaciones populares e indígenas.



De hecho el otrora contenido indígena del que hacía gala el gobierno, hoy está ausente hasta de los discursos oficiales, dándose una total preeminencia a los movimientos sociales con vínculos orgánicos con el MAS como únicas organizaciones sociales representativas de los intereses populares e interlocutoras del gobierno, lo que resulta altamente preocupante, sobre todo cuando se ha llegado a proponer que el estratégico papel del control social, sea asignado, casi exclusivamente a esos movimientos sociales aglutinados en la CONALCAM.

En definitiva, el rumbo del proceso de cambio estará marcado directamente por la incorporación o no y la independencia

que se permita a la participación política social en el desarrollo del nuevo marco normativo y en la vida política del país. Por ello, el desafío inicial de estos primeros meses de instalación del Estado Plurinacional, es superar lo que el mismo Presidente dijo al evaluar los resultados de la pasada jornada electoral: “Nuevamente, el pueblo boliviano con su participación en estas elecciones nacionales demostró que es posible cambiar Bolivia en base a los votos del pueblo”.